

# Carta abierta al presidente del Gobierno y al ministro de Educación

Estimados señores:

LA EDUCACIÓN es el mejor instrumento para superar los momentos difíciles que vive este país y deseáramos que el 2013 se convirtiera en un año lleno de oportunidades para todos los españoles.

Los recortes indiscriminados aplicados en los presupuestos generales del Estado a servicios públicos imprescindibles como la sanidad o la educación, lastran las posibilidades de recuperación educativa, cultural, social, ética y moral, política y económica de nuestro país.

Manifestamos nuestra más cordial oposición a que se lleve a la práctica sin el más mínimo debate "La actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012-2015" que anuncia la reducción del gasto en educación de un 1% del PIB (lo que representaría una reducción del 21,3% del porcentaje destinado a Educación), o lo que es lo mismo una reducción de 11.000 millones de euros en este mismo período, y una herida profunda al reconocimiento de derechos y libertades fundamentales.

Los funcionarios públicos de la educación hemos asumido todos los sacrificios que puedan exigirse en estos momentos, como el que representa trabajar más y cobrar menos, en solidaridad con los millones de ciudadanos que han perdido sus empleos por causa de una política económica que ha permitido la especulación y el fomento de comportamientos corruptos. Nos duele especialmente que esa actitud solidaria sea pagada con recortes durísimos en los presupuestos de educación que ya provocan graves mermas en la acción educativa de todos los niveles de enseñanza. En lo que respecta a los niveles universitarios, las Comunidades autónomas han obligado a las universidades a no renovar los contratos de una parte importante de su profesorado asociado y los recortes presupuestarios han congelado la convocatoria de nuevas plazas

cantera de jóvenes investigadores españoles, - la mejor, la más numerosa y mejor formada de la historia de España-, tenga que abandonar nuestro país al no tener posibilidad de seguir investigando en España por los devastadores recortes presupuestarios realizados también en los capítulos de ayuda y fomento de la investigación.

Por todo lo expuesto, apoyamos todas las reivindicaciones que tiendan a evitar el deterioro de la calidad de la educación corriente servicio público, y nos sumamos a la reciente declaración de 50 rectores españoles que han denunciado la asfixia provocada por la política gubernamental y por los actuales gestores ministeriales; nos vamos a oponer sistemáticamente a cualquier nuevo recorte que afecte a la calidad de la enseñanza; vamos a coordinar acciones que permitan activar el debate universitario, con el mayor rigor académico, y con el máximo celo y dedicación a esta tarea prioritaria, ya que está en juego la supervivencia de un modelo educativo que promueve la igualdad de oportunidades; sólo apoyaremos una Ley que tenga el compromiso gubernamental de atender con los necesarios recursos la mejora integral de la calidad de la enseñanza; vamos a seguir reafirmando que no hay ley buena que se plantee desde una concepción previa de aplicación de recortes presupuestarios.

Queremos transmitirles nuestros mejores deseos para este nuevo año y reiterar nuestro deseo para que el 2013 sea un año cargado de Oportunidades para la Educación.

(\*) Agustín García Matilla es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y Andrés Palacios es el director de la Escuela de Magisterio. Ambos del Campus Público María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia.

*La Universidad no puede renunciar a ejercer ese papel de foro estimulador de la conciencia crítica de la ciudadanía. No hay borrador de Ley de Educación, ni siquiera un borrador de una ley llamada LOMCE, que pueda ser aceptado en el marco de un proyecto que en lugar de gestionar decide recortar derechos y contribuir, por ejemplo, a que la excepcional cantera de jóvenes investigadores españoles tenga que abandonar nuestro país*

competencia ética, la competencia emocional o las destrezas comunicativas de los estudiantes. Ahora más que nunca sería imprescindible consensuar una nueva ley de educación que no nos hiciera renunciar a los logros alcanzados en todos estos años de democracia, una educación integral del individuo que promoviera un humanismo dialéctico capaz de formar a ciudadanos más comprometidos con el bien común de la sociedad, y más alejados de ese desmedido afán de lucro individual que se ha querido imponer compitiendo con los valores básicos que la escuela tiene el mandato de transmitir. El ministro de Educación se ha manifestado sobre la necesidad de dar una formación económica a lo largo de todos los ciclos formativos, sin embargo, por ejemplo, en el nuevo proyecto de ley se suprime la educación para la ciudadanía y se sigue debilitando el peso de las enseñanzas humanísticas y artísticas.

La Universidad no puede renunciar a ejercer ese papel de foro estimulador de la conciencia crítica de la ciudadanía. No hay borrador de Ley de Educación, ni siquiera un borrador de una ley llamada LOMCE, que pueda ser aceptado en el marco de un proyecto que en lugar de gestionar decide recortar derechos y contribuir, por ejemplo, a que la excepcional

y a tener problemas, incluso para abonar las nóminas de su profesorado estable. En las enseñanzas no universitarias se ha reducido significativamente el presupuesto para el funcionamiento ordinario de los centros y se han eliminado las partidas destinadas a combatir el abandono prematuro del sistema escolar o la destinada a atender a los escolares con necesidades especiales. Esta reducción presupuestaria afecta a los eslabones más débiles de la cadena educativa.

Hay decisiones determinantes en la reducción del presupuesto dedicado a educación y que representan una marcha atrás inaceptable pues suponen la eliminación de logros alcanzados a lo largo de todo el período democrático. La eliminación de la etapa de 0 a 3 años es algo que rompe con una filosofía que desde hace muchos años había considerado a este período como el más determinante en la formación de todo ser humano.

La situación de deterioro sobrevenido que vive nuestro país, debería dar lugar a que cualquier Ley de Educación futura diera prioridad a contenidos que promovieran el fomento de un pensamiento crítico de la ciudadanía y de la enseñanza de sólidos comportamientos éticos. Los informes PISA no miden resultados en aspectos como la